Mandatos del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; y del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas

Ref.: AL MEX 4/2022

(por favor, utilice esta referencia en su respuesta)

17 de marzo de 2022

Excelencia,

Tenemos el honor de dirigirnos a Usted en nuestra calidad de Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; y Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, de conformidad con las resoluciones 42/22, 43/16 y 41/6 del Consejo de Derechos Humanos.

En este contexto, quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información que hemos recibido en relación con los alegatos **de investigaciones penales y otros actos de intimidación y represalia por cooperar con las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos en México, en contra de Salvador Leyva Morelos Zaragoza, Verónica Jazmín Berber Calle y Elvira Claudia Mejía Hernández, en particular, por haberse desempeñado como defensores de los derechos humanos de la Sra. Brenda Quevedo ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y por haber ejercido acciones destinadas a la implementación de la opinión 45/2020.**

Verónica Jazmín Berber Calle es Subdirectora de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos en el Instituto Federal de Defensoría Pública de México. **Salvador Leyva Morelos Zaragoza** es Secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos en el Instituto Federal de Defensoría Pública de México. **Elvira Claudia Mejía Hernández** es Defensora Pública Federal de Brenda Quevedo. Los tres son funcionarios públicos del Estado Mexicano y han asumido dentro de su mandato la defensa y representación de la Sra. Brenda Quevedo, ante otras instituciones nacionales e internacionales. **Brenda Quevedo** se encuentra arbitrariamente detenida en México, desde 2009, según lo establecido en la opinión 45/2020 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. El Grupo de Trabajo consideró que la prisión preventiva en la que se encuentra, que a la fecha acumula más de 12 años de duración, se impuso en violación del derecho a un juicio justo y sin las garantías del debido proceso.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria adoptó la opinión 45/2020 en agosto de 2020. En la opinión, concluyó que la privación de libertad de Brenda Quevedo Cruz, en México, es arbitraria y contraria a los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos internacionales de los que México es parte. El Grupo de Trabajo solicitó al Gobierno de México tomar las acciones pertinentes a los fines de asegurar la liberación inmediata de la Sra. Quevedo, el pago de una indemnización y otras reparaciones, así como la realización de una investigación sobre las violaciones a sus derechos humanos. En septiembre de 2020, de conformidad con los métodos de trabajo del Grupo,¹ la versión avanzada y sin editar de la opinión fue transmitida al Gobierno de México y a la

¹ A/HRC/36/38

fuelle del caso, la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos (STCT), del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP). El IFDP es un órgano del Poder Judicial de la Federación que brinda defensa penal y orientación, asesoría y representación jurídica y legal gratuita en México.

El 9 de octubre de 2020, el Gobierno de México indicó que tomaría las acciones necesarias con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su opinión 45/2020, relativa al caso de Brenda Quevedo. El Grupo de Trabajo expresó públicamente su satisfacción por la promesa de liberación del Gobierno. No obstante, la Sra. Quevedo no habría sido liberada aún.

Según la información recibida:

En octubre de 2020, la defensa de la Sra. Quevedo ejerció un conjunto de acciones judiciales a nivel nacional para requerir la implementación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo y poner fin a la detención arbitraria. Por ejemplo, el 20 de octubre de 2020 se presentaron diversos escritos ante el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, solicitando el cumplimiento inmediato de la opinión 45/2020. El 21 de octubre de 2020 el Juzgado acordó no haber recibido comunicación alguna sobre la opinión 45/2020, a través de ningún medio oficial, por lo que determinó que, hasta que se recibiera comunicado oficial, analizaría si debía o no efectuar pronunciamiento al respecto.

El 28 de octubre de 2020 la Dirección General de Derechos Humanos Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal envió vía correo electrónico al Juzgado la versión avanzada sin editar de la opinión 45/2020. El Juzgado acordó que se tomarían en consideración los argumentos expuestos en la opinión, a la luz de las constancias que integran el expediente de la causa penal, las circunstancias especiales y complejidad del caso en concreto, al momento de resolver el incidente de revisión de medida cautelar promovido por la defensa.

Adicionalmente, los abogados defensores de la Sra. Quevedo han presentado otros juicios de amparo indirecto en los que se reclama el incumplimiento de distintas recomendaciones contenidas en la opinión 45/2020.

1. Juicio de amparo indirecto 595/2020 ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México (posteriormente juicio de amparo indirecto 542/2020 ante el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México).

El 26 de octubre de 2020 la STCT, en representación de la Sra. Quevedo, presentó demanda de amparo indirecto en contra del juzgado ante el cual se tramita el proceso penal, por el incumplimiento de la opinión 45/2020, que fue conocida por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal (amparo indirecto 595/2020).

El mismo día, el Juzgado Cuarto ordenó que se le garantizara una adecuada atención médica a la Sra. Quevedo. Sin embargo, en relación a la petición de inmediata libertad, se consideró que dicha situación

debía plantearse ante la autoridad jurisdiccional que conoce de la causa penal.

El Juzgado Cuarto declinó competencia a favor del Juzgado Octavo (amparo indirecto 542/2020), que el 4 de noviembre de 2020 apercibió a la STCT para que indicara si se tenía la calidad de defensor público federal de Brenda Quevedo. El 10 de noviembre de 2020 el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal desechó de plano la demanda, por considerarla notoriamente improcedente, bajo el argumento de que fue presentada por la STCT y que, a su apreciación, no se advertía que la Sra. Quevedo se encontrara imposibilitada para promover por propio derecho.

2. Juicio de amparo indirecto 53/2021 ante el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Morelos.

El 6 de noviembre de 2020, se había presentado una denuncia ante la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, dependiente de la Fiscalía General de la República, en donde se solicitó que se diera cumplimiento a la opinión 45/2020 y se le diera el trámite correspondiente a la investigación de los actos de tortura y malos tratos que sufrió la Sra. Quevedo, de los cuales existe constancia desde el 2009.

El 2 de febrero de 2021, la defensa de la Sra. Quevedo presentó demanda de amparo indirecto en contra del Titular de la Fiscalía General de la República y otras autoridades, reclamando la omisión de dar cumplimiento a la opinión 45/2020 respecto a la investigación adecuada de los actos de tortura y malos tratos sufridos por la Sra. Quevedo.

El 3 de febrero de 2021, se admitió la demanda presentada y se negó la suspensión provisional del acto reclamado. La audiencia incidental se celebró el 22 de febrero de 2021, en la que se negó la suspensión definitiva. El 22 de febrero de 2021 se amplió la demanda inicial para señalar al Ministerio Público a cargo de la investigación del caso como autoridad responsable. Esta ampliación fue admitida mediante acuerdo del 24 de febrero de 2021.

El 24 de marzo de 2021 se suspendió el juicio hasta en tanto el Tribunal Colegiado de Circuito resolviera las quejas interpuestas por la STCT y la víctima. Este juicio de amparo indirecto continúa en trámite.

3. Juicio de amparo indirecto 268/2021 ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

El 9 de marzo de 2021 la STCT, en representación de la Sra. Quevedo, presentó demanda de amparo indirecto en contra del Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y el Titular de la Dirección General Adjunta para la Atención de Casos en Organismos Internacionales de Derechos Humanos, ambos de la Secretaría de Gobernación, reclamando la omisión de cumplir con sus obligaciones y

atribuciones expresamente establecidas en la legislación nacional respecto al cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones emitidas por organismos internacionales en materia de derechos humanos.

El 11 de marzo de 2021 el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México advirtió que era incompetente en razón de materia para conocer de la demanda, y lo remitió a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito conoció del conflicto de competencia y el 3 de mayo de 2021 resolvió que correspondería seguir conociendo del asunto al Juzgado Décimo Cuarto en materia administrativa.

El 19 de mayo de 2021 el Juzgado Décimo Cuarto resolvió desechar la demanda de amparo interpuesto por la STCT, bajo el argumento de que la STCT carece de interés legítimo para la interposición del juicio.

En contra de dicha determinación, la STCT presentó recurso de queja, el cual se tramitó dentro del expediente 111/2021 del índice del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. El 8 de julio de 2021 la alzada resolvió que era infundado el recurso de queja interpuesto bajo el argumento de que la demanda debe ser interpuesta por conducto de la persona que detente interés jurídico o legítimo para ello.

4. Juicio de amparo indirecto 1394/2021 del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Morelos (antes Juicio de amparo indirecto 500/2021 del Juzgado Noveno en Materia Administrativa de la Ciudad de México y 409/2021 del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Morelos).

El 20 de abril de 2021, en representación de la Sra. Quevedo, la STCT presentó demanda de amparo indirecto en la que se reclamaron las omisiones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al abstenerse de inscribir a Brenda Quevedo en el Registro Nacional de Víctimas, así como de otorgarle una indemnización y otras reparaciones, conforme a las atribuciones legales de la Comisión.

El 23 de abril de 2021 el Juzgado Noveno en Materia Administrativa de la Ciudad de México radicó la demanda dentro del amparo indirecto 500/2021. En ese auto declinó competencia a favor del Juez de Distrito en el estado de Morelos, remitiéndose el caso a este último órgano judicial, y concedió la suspensión de plano para efecto de que las autoridades responsables realizaran todas las acciones necesarias para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, atención médica y psicológica de emergencia.

El 27 de abril de 2021 el Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Morelos aceptó la competencia declinada y registró el amparo indirecto bajo el número 409/2021 para el trámite correspondiente.

El 21 de septiembre de 2021 el Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Morelos resolvió declararse legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo en cuestión, y estimó que el órgano jurisdiccional competente era el Juzgado Tercero, por tramitar el amparo indirecto 53/2021. En consecuencia, se remitió el asunto para que se informara si dicho órgano aceptaba la competencia declinada.

El 19 de octubre de 2021 el Juzgado Sexto de Distrito en Morelos recibió escrito del Juzgado Tercero, en el que le informa que resolvió no aceptar la competencia declinada. El 21 de octubre de 2021, el Juzgado Sexto de Distrito acordó enviar copia certificada del expediente del juicio a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, para consultar a qué órgano jurisdiccional corresponde el turno del juicio, con base en el sistema de relación de expedientes. La fuente no tiene certeza sobre el órgano jurisdiccional que continuará conociendo del amparo indirecto.

La fuente advierte que no existe identidad en actos ni autoridades reclamadas en los juicios de amparo referidos. El hecho de que las violaciones reclamadas giren en torno al cumplimiento de la opinión 45/2020 del Grupo de Trabajo no significa que sean las mismas. Cada una se refiere a la ausencia de cumplimiento de una medida o recomendación específica y que, por el ámbito de atribuciones y competencias de las instituciones mexicanas, no pueden imputarse a una sola autoridad. En ese sentido, se enfatiza que es falso que se haya interpuesto diversos juicios de amparo por los mismos actos reclamados y autoridades responsables.

Se destaca que el cumplimiento puntual de cada una de las medidas por parte de las instituciones competentes llevará como resultado la observancia total de la opinión 45/2020, para garantizar los derechos de la Sra. Quevedo, lo cual también conlleva la observancia de los estándares nacionales e internacionales en materia de tortura, detención arbitraria, justicia y reparación integral.

Investigación penal y otros actos de represalia en contra de la defensa de la Sra. Quevedo, luego de haber ejercido acciones para la adopción e implementación de la opinión 45/2020

Según la información recibida, derivado de la exigencia del cumplimiento de las recomendaciones contenidas en la opinión 45/2020, la Fiscalía General de la República, inició tres investigaciones en contra de la defensa de la Sra. Brenda Quevedo, a saber:

- FED/DGCAP/DGCAP-CDMX/79/2021, en contra de Salvador Leyva Morelos Zaragoza, Secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos y Elvira Claudia Mejía Hernández, Defensora Pública Federal de Brenda Quevedo.
- FED/DGCAP/DGCAPCDMX/80/2021, en contra de Salvador Leyva Morelos Zaragoza, Secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos.

- FED/DGCAP/DGCAP-CDMX/81/2021, en contra de Salvador Leyva Morelos Zaragoza, y Verónica Jazmín Berber Calle, Secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos y Subdirectora de Área.

Se indica que la Fiscalía General de la República investiga el delito de abuso de autoridad respecto a Salvador Leyva y Verónica Berber, por supuestamente haber comparecido en una audiencia en representación de Brenda Quevedo Cruz sin facultades legales para ello. El delito estaría contenido en la Ley de Amparo. Se investiga el haber presentado amparos en representación de la Sra. Quevedo, relacionados con el incumplimiento de la opinión 45/2020 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, así como por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, en contra de Salvador Leyva, por supuestamente haber presentado pruebas a favor de Brenda Quevedo Cruz. Los dos sujetos implicados únicamente han tenido acceso a la carpeta de investigación FED/DGCAP/DGCAP-CDMX/79/2021.

En oficio del 30 de octubre de 2021, el Ministerio Público solicitó información al Instituto Federal de Defensoría Pública relativa a Elvira Claudia Mejía Hernández y Salvador Leyva Morelos Zaragoza, indagando sobre el cargo que ostentan, sus adscripciones y si cuentan con designación para la representación legal de Brenda Quevedo en el proceso penal 286/2019.

Mediante tres oficios fechados 31 de octubre de 2021, la Fiscalía General de la República solicitó a los Jueces Tercero y Sexto de Distrito en el Estado de Morelos y al Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de Ciudad de México, copias certificadas de los expedientes de los juicios de amparo 53/2021, 409/2021 y 268/2021, promovidos por Salvador Leyva Morelos Zaragoza, en los que se señala como acto reclamado la omisión de dar cumplimiento a la opinión 45/2020 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Ambos oficios señalan que la documentación es requerida en el marco de una investigación contra dicha persona por supuestamente omitir mencionar en la demanda de amparo que existían diversos juicios de amparo en trámite bajo los mismos actos reclamados.

El 20 de diciembre de 2021 la Fiscalía General solicitó ante el Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de Ciudad de México copias certificadas de la totalidad del expediente 542/2020, a efectos de la integración de la carpeta de investigación FED/DGCAP/DGCAPCDMX/80/2021.

El 26 de noviembre de 2021, el Sr. Morelos Zaragoza solicitó al Agente del Ministerio Público de la Federación acceso a la carpeta de investigación FED/DGCAP/DGCAPCDMX/80/2021, el cual fue negado. El 26 de enero de 2022 se presentó demanda de amparo en contra de la negativa de acceso a la investigación, el cual continúa en trámite.

El 11 de febrero de 2022, el Agente del Ministerio Público de la Federación informó al Sr. Morelos Zaragoza sobre su deber de presentarse en calidad de imputado, a rendir declaración ministerial, el 15 de febrero de 2022 a las 11:00 horas, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República.

El sábado 12 de febrero de 2022, el domicilio del Sr. Morelos Zaragoza fue ilegalmente registrado en su ausencia, sin previo aviso ni identificación de los autores o exhibición de una orden judicial de registro. El 22 de febrero se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de la Ciudad de México, por los delitos de allanamiento de morada y robo, en perjuicio del Sr. Morelos Zaragoza, previstos y sancionados en Código Penal Federal.

El martes 15 de febrero de 2022, el Sr. Morelos Zaragoza acudió a la Fiscalía en calidad de “imputado” (o investigado), se reservó el derecho a declarar y solicitó copias de las carpetas de investigación. El miércoles 16 de febrero acudieron en calidad de co-investigadas, Verónica Berber, Subdirectora de la Secretaría Técnica Contra la Tortura y Elvira Claudia Mejía, Defensora Pública de la Sra. Quevedo. También se reservaron el derecho a declarar y solicitaron acceso a las carpetas de investigación.

El 22 de febrero de 2022 se tuvo conocimiento, a través de una cuenta anónima de twitter, de que se había presentado denuncia penal en contra del Sr. Morelos Zaragoza y un periodista, por supuesto ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia. Se desconoce quién presentó la denuncia ni las consecuencias legales que la misma habría tenido en la Fiscalía General de la República.

Situación actual de la Sra. Brenda Quevedo

Actualmente la Sra. Quevedo sigue detenida, en prisión preventiva, luego de más de 12 años desde su arresto, sin haber sido condenada mediante sentencia judicial firme. A pesar de los múltiples intentos y recursos ejercidos por la defensa ante las diferentes instancias y autoridades competentes en México, la liberación no se ha materializado. Ello, no obstante, las declaraciones del Presidente y de la Secretaría de Gobierno de México en 2020, en las que se afirmó que se haría todo lo necesario para cumplir las recomendaciones del Grupo de Trabajo, que incluyen no sólo la liberación inmediata de la persona arbitrariamente detenida, sino también el pago de una compensación y la adopción de otras medidas de reparación en su favor, así como la investigación y sanción de los perpetradores de las violaciones a sus derechos humanos.

Se destaca una grave situación de salud que pone en riesgo la vida y la integridad física de la Sra. Quevedo en el lugar de detención. Se reclama que los problemas de salud y los padecimientos médicos que sufre no son debidamente atendidos. Incluso, por los síntomas sufridos, se sospecha que padeció del virus del COVID-19, sin tener constancia certera de ello. Las provisiones de aseo personal y artículos de higiene, que la familia de la Sra. Quevedo regularmente le ha llevado a prisión, han sido recientemente devueltas sin explicación alguna. Igualmente, se indica que en enero de 2022 la Sra. Quevedo fue trasladada a otra sección del centro de reclusión, donde sus condiciones de detención empeoraron aún más.

Sin pretender prejuzgar la veracidad de la información recibida, quisiéramos expresar nuestra profunda preocupación por las alegaciones arriba mencionadas, ya que podrían constituir actos de intimidación y represalia, en contra de Salvador Leyva Morelos Zaragoza, Elvira Claudia Mejía Hernández y Verónica Jazmín Berber Calle, por cooperar con las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos en

México; en particular, por haber fungido como defensores de los derechos humanos de la Sra. Brenda Quevedo y haber desempeñado acciones en favor de la implementación de la opinión 45/2020 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. No es la primera vez que se reportan actos de intimidación y represalias contra personas defensoras de derechos humanos en México, tal y como reflejan los informes del Secretario General sobre cooperación con la ONU, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos.²

Adicionalmente, quisieramos expresar nuestra profunda preocupacion ante la falta de implementación de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su opinión 45/2020. En ese sentido, resulta sumamente preocupante que la Sra. Quevedo siga privada de su libertad, en prision preventiva, luego de más de 12 años desde su arresto, sin haber sido sentenciada, así como luego de más de un año de la emisión y comunicación de la opinion 45/2020 del Grupo de Trabajo y sus recomendaciones. Igualmente, preocupa que no se haya investigado ni sancionado a los autores responsables de la violacion a los derechos humanos de la Sra. Quevedo, y que no se le haya ofrecido ningun tipo de compensación y otras formas de reparación por tales transgresiones de parte de funcionarios del Estado.

Quisiéramos extender un llamado al Gobierno de Su Excelencia para que tome acciones urgentes encaminadas a atender la situacion de salud de la Sra. Brenda Quevedo, así como a mejorar las condiciones de su detención, tomando en consideración los requerimientos médicos que su condición exige.

En relación con las alegaciones arriba mencionadas, sírvase encontrar adjunto el **Anexo de referencias al derecho internacional de los derechos humanos** el cual resume los instrumentos y principios internacionales pertinentes.

Emitimos este llamamiento para salvaguardar los derechos de los prenombrados ciudadanos, con el objeto de proteger sus derechos de posibles daños irreparables y sin perjudicar cualquier decisión legal posterior. Se extiende este llamamiento urgente mientras cualquier otra acción estuviere pendiente.

Es nuestra responsabilidad, de acuerdo con los mandatos que nos han sido otorgados por el Consejo de Derechos Humanos, intentar clarificar las alegaciones llevadas a nuestra atención. En este sentido, estaríamos muy agradecidos/as de tener su cooperación y sus observaciones sobre los asuntos siguientes:

1. Sírvase proporcionar cualquier información o comentario adicional en relación con las alegaciones mencionadas arriba.
2. Sírvase proporcionar información sobre las acciones emprendidas por las autoridades fiscales y/o judiciales en México en contra de Salvador Leyva Morelos Zaragoza, Verónica Jazmín Berber Calle y Elvira Claudia Mejía Hernández por haber ejercido recursos legales a los fines de solicitar la implementación de la opinión 45/2020 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. En ese sentido, estaríamos particularmente interesados en recibir información sobre las bases fácticas y jurídicas que motivan las mencionadas investigaciones.

² [A/HRC/48/28](#) y [A/HRC/45/36](#)

3. Sírvase proporcionar información sobre los mecanismos contemplados y las acciones tomadas por el Gobierno de Su Excelencia con el objetivo de garantizar que Salvador Leyva Morelos Zaragoza, Verónica Jazmín Berber Calle y Elvira Claudia Mejía Hernández, en su condición de funcionarios públicos, puedan ejercer sus labores y defender los derechos humanos en México, sin miedo a sufrir represalias o actos de intimidación y acoso por su trabajo, en particular en cuanto a su cooperación con las Naciones Unidas.
4. Sírvase proporcionar información sobre el estado actual de las investigaciones iniciadas a partir de la denuncia interpuesta el 22 de febrero de 2022, por allanamiento de morada y robo al domicilio del Sr. Morelos Zaragoza, el 12 de febrero de 2022.
5. Sírvase proporcionar información sobre los mecanismos de protección de los defensores de derechos humanos en México, incluyendo las leyes, los órganos, recursos y procedimientos que existen para garantizar el trabajo en favor de la promoción y defensa de los derechos humanos y para proteger a aquellos individuos que se vean amenazados como consecuencia de su trabajo en este ámbito.
6. Sírvase proporcionar información sobre las acciones tomadas por el Gobierno de Su Excelencia a los fines de prevenir, investigar y sancionar los actos de intimidación y represalia por cooperar con las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos.
7. Sírvase proporcionar información sobre los obstáculos que ha enfrentado el Gobierno de Su Excelencia en la implementación de la opinión 45/2020 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. En particular, estaríamos interesados e interesadas en conocer el estado actual del procedimiento para asegurar la liberación de la Sra. Quevedo, la reparación de las violaciones a sus derechos humanos y la investigación de aquellas personas responsables por la violación de estos. También consideramos importante conocer qué medidas ha adoptado el Gobierno de Su Excelencia para garantizar el respeto a la vida, la salud y la integridad personal de la Sra. Quevedo.

Agradeceríamos recibir una respuesta en un plazo de 60 días. Transcurrido este plazo, esta comunicación y toda respuesta recibida del Gobierno de su Excelencia se harán públicas a través del sitio [web](#) de informes de comunicaciones. También estarán disponibles posteriormente en el informe habitual que se presentará al Consejo de Derechos Humanos.

A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la(s) persona(s) mencionada(s) e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Quisiéramos asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan.

En vista de las alegaciones de represalias por cooperación con las Naciones Unidas en la esfera de derechos humanos, nos reservamos el derecho de compartir

esta comunicación, y cualquier respuesta recibida del gobierno de Su Excelencia, con otros órganos o representantes de la Organización que tratan la cuestión de intimidación y represalias por cooperación con las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos, en particular la alta funcionaria encargada por el Secretario General de dirigir los esfuerzos dentro del sistema de las Naciones Unidas para abordar este asunto.

Podremos expresar públicamente nuestras preocupaciones en un futuro cercano, ya que consideramos que las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata. Además, consideramos que la opinión pública tiene que ser informada sobre las implicaciones potenciales relacionadas con las alegaciones arriba mencionadas. El comunicado de prensa indicará que hemos estado en contacto con el Gobierno de Su Excelencia para aclarar las cuestiones relevantes.

Acepte, Excelencia, la expresión de nuestra más distinguida consideración.

Miriam Estrada-Castillo
Vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Mary Lawlor
Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos

Melissa Upreti
Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas

Anexo

Referencias al derecho internacional de los derechos humanos

En relación con las alegaciones, nos gustaría llamar la atención del Gobierno de Su Excelencia sobre los estándares y normas internacionales relacionadas con este caso enunciadas en los artículos 3, 5, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 7, 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria encontró que estaban siendo violados con la detención de la Sra. Brenda Quevedo. Dichas normas establecen obligaciones de garantizar el derecho a la vida; que nadie sea sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo las personas en detención; el derecho a la libertad y a la seguridad personal; y que toda persona tenga derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial.

En su Observación General nº 35, el Comité de Derechos Humanos indica que el derecho a la seguridad personal también obliga a los Estados partes a adoptar medidas apropiadas para proteger a las personas de amenazas previsibles contra su vida o su integridad física provenientes de cualquier agente estatal o privado. Asimismo nota que los Estados partes deberán adoptar tanto medidas para prevenir lesiones futuras como medidas retrospectivas, como la aplicación de la legislación penal, en respuesta a lesiones ya infligidas (CCPR/C/GC/35, párr. 9).

Quisiéramos también llamar la atención del Gobierno de Su Excelencia sobre las normas fundamentales enunciadas en la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. En particular, quisiéramos referirnos a los artículos 1 y 2 que declaran que toda persona tiene derecho a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional y que cada Estado tiene la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

De igual manera, quisiéramos hacer mención del artículo 12, en sus párrafos 2 y 3, el cual estipula que el Estado garantizará la protección, por las autoridades competentes, de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la Declaración. A este respecto, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a una protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a actos de violencia perpetrados por grupos o particulares que afecten el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

En lo que respecta a las alegaciones recibidas acerca de actos de intimidación o represalia contra los que cooperan con las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos, nos gustaría referirnos a las resoluciones 12/2, 24/24, 36/21, 42/28

y 48/17 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Dichas resoluciones reafirman el derecho de toda persona, individualmente o en asociación con otras, a acceder libremente a los órganos internacionales y a comunicarse con ellos sin restricciones, en particular en el caso de las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos. En estas resoluciones, el Consejo insta a los Estados a que adopten todas las medidas apropiadas para prevenir los actos de intimidación o represalia. Esto incluiría la adopción y aplicación de leyes y políticas concretas a fin de proteger efectivamente contra todo acto de intimidación o represalia a quienes traten de colaborar, colaboren o hayan colaborado con las Naciones Unidas. El Consejo insta asimismo a los Estados a que garanticen la rendición de cuentas por todo acto de intimidación o represalia mediante una investigación imparcial, pronta y exhaustiva de todo presunto acto de intimidación o de represalia, a fin de llevar a los responsables ante la justicia; faciliten a las víctimas el acceso a recursos efectivos de conformidad con sus obligaciones y compromisos internacionales de derechos humanos; y eviten toda repetición de dichos actos.

Nos gustaría reiterar al Gobierno de su Excelencia las obligaciones de México a través de su ratificación el 23 de mayo 1981 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en particular el artículo 7 que establece que los Estados adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país.

Como destacó el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas en uno de sus informes al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/23/50), la estigmatización, el acoso y los ataques directos se utilizan para silenciar y desacreditar a las mujeres que se manifiestan como líderes, trabajadoras comunitarias, defensoras de los derechos humanos y políticas. Las defensoras son a menudo objeto de violencia específica de género, como el abuso verbal basado en su sexo, el abuso sexual o la violación; pueden experimentar intimidación, ataques, amenazas de muerte e incluso el asesinato. En ocasiones, la violencia contra las defensoras es consentida o perpetrada por agentes estatales. El Grupo de Trabajo recomendó acelerar los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluso a través de un marco legal integral para combatir la impunidad, con el fin de cumplir con los derechos humanos de las mujeres y mejorar las condiciones propicias para la participación de las mujeres en la vida política y pública.

En una declaración conjunta, el Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas hizo hincapié en que las defensoras de los derechos humanos se enfrentan a retos únicos, impulsados por una discriminación muy arraigada contra las mujeres y por los estereotipos sobre el papel que les corresponde en la sociedad. Además de los riesgos de amenazas, ataques y violencia a los que se enfrentan todos los defensores de los derechos humanos, las defensoras de los derechos humanos están expuestas a riesgos específicos, como los ataques misóginos, la violencia de género (incluida la violencia sexual), la falta de protección y de acceso a la justicia, así como la falta de recursos. (<https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20938&LangID=E>)

También queremos referirnos a la resolución 68/181 de la Asamblea General, adoptada el 18 de diciembre de 2013, sobre la protección de las defensoras de los derechos humanos. En concreto, nos gustaría referirnos a los artículos 7, 9 y 10, en los

que se pide a los Estados que, respectivamente, reconozcan públicamente el importante papel que desempeñan las defensoras de los derechos humanos, adopten medidas prácticas para prevenir las amenazas, el acoso y la violencia contra ellas y para combatir la impunidad de esas violaciones y abusos, y garanticen que todas las disposiciones legales, medidas administrativas y políticas que afecten a las defensoras de los derechos humanos sean compatibles con las disposiciones pertinentes del derecho internacional de los derechos humanos.

El Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas en su informe sobre las mujeres privadas de libertad concluyó que la privación de libertad entraña violaciones de los derechos humanos y tiene consecuencias devastadoras para la vida de las mujeres, pues las expone al riesgo de sufrir torturas, violencia y abusos, condiciones inseguras e insalubres, una falta de acceso a los servicios de salud y una mayor marginación. Aísla a las mujeres de las oportunidades educativas y económicas, de sus familias y amigos, y de la posibilidad de tomar sus propias decisiones y dirigir el curso de sus vidas como mejor les parezca (A/HRC/41/33).

Asimismo, quisiéramos señalar a su atención el informe temático (A/68/340) de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, en el que la Relatora Especial analiza las violaciones de los derechos humanos perpetradas contra las mujeres, prestando especial atención a las condiciones a las que se enfrentan mientras están detenidas. En este informe se destaca el fuerte vínculo entre la violencia contra la mujer y el encarcelamiento de las mujeres, ya sea antes, durante o después del encarcelamiento. También deseamos señalar el Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en el que se pide a los Estados que adopten diferentes prácticas de encarcelamiento y tratamiento, así como diferentes servicios e infraestructura para satisfacer las necesidades particulares de las mujeres y garantizar su protección (A/HRC/31/57).

En este contexto, también se debe hacer referencia a las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y las medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok). En particular, quisiéramos referirnos a las Reglas 10 y 11 que esbozan la necesidad de que en los centros de detención se preste atención médica específica a las mujeres. A este respecto, deseamos recordar que las mujeres corren un riesgo especial de sufrir torturas y malos tratos durante la prisión preventiva, ya que la violencia y el abuso sexual pueden utilizarse como medio de coacción y para obtener confesiones (A/HRC/31/57).